

SIGNIFICACIÓN LATINOAMERICANA DE LA EXPERIENCIA CHILENA RECIENTE

PEDRO VUSKOVIC BRAVO

EXPLICACIÓN NECESARIA

No ORBANTE el número apreciable de publicaciones recientes, apenas se inicia la tarea de análisis sistemático de los hechos ocurridos en Chile durante los últimos años. En la medida de su avance, van disipándose las primeras hipótesis generales y excesivamente simplistas, ya sea que se refieran a cuestiones tácticas, que explicarían la derrota, o a la esencia misma del proceso, como ocurre en las apreciaciones elaboradas en abstracto, prescindiendo de la consideración detenida de la diversidad de aspectos concretos que la rodearon. Es el caso, por ejemplo, de las afirmaciones globales que imputan la responsabilidad de la caída del gobierno popular a “desviaciones de izquierda” que aislaron a la clase obrera, o según otros al predominio de “posiciones reformistas” que impidieron el desarrollo pleno del proceso revolucionario; como lo es también la afirmación, igualmente superficial, en el sentido de que esta derrota no viene sino a confirmar las leyes generales de la historia, según las cuales el Gobierno Popular habría estado condenado al fracaso desde su mismo inicio.

Ha transcurrido entretanto tiempo suficiente como para que puedan apreciarse, con la perspectiva debida, primero la significación que tuvo y estaba llamado a tener el gobierno del presidente Allende, y luego, el carácter de la dictadura que se instaura a partir del golpe militar. Ambos encierran un caudal valioso de enseñanzas respecto de cuya dilucidación el pueblo chileno tiene deuda contraída con quienes apoyaron su experiencia creadora y con quienes se solidarizan ahora con su dura lucha contra la dictadura fascista. Tales enseñanzas son fundamentales para los países dependientes, particularmente los latinoamericanos, y contribuyen ciertamente a enriquecer el acervo teórico del movimiento revolucionario mundial.

La urgencia de las contribuciones necesarias a la profundización del análisis justifica, particularmente para quienes han tenido algún grado de participación directa en el proceso, que no se espere la elaboración rigurosa de sus planteamientos para entregar antecedentes u opiniones que puedan ser útiles a una tarea necesariamente colectiva de análisis y reflexión. Aún más, es una obligación hacerlo. Valga ello, pues, como justificación a estas notas apresuradas.

ALGUNOS ANTECEDENTES

A partir de 1970, y en un tiempo relativamente muy corto, Chile vive dos experiencias extremas en la historia reciente de América Latina. Con el triunfo electoral de las fuerzas populares, en septiembre de ese año, se abre paso a un esfuerzo histórico sin precedentes de transformación social bajo modalidades que configuraron, en el atento interés mundial, una “vía chilena al socialismo”: se rescatan recursos nacionales y se dan pasos importantes para superar la condición de dependencia del país; se modifican rasgos característicos de exclusión y marginación social y se gestan nuevas formas e instrumentos de participación y poder popular; se erradica el latifundio y se sustituye el dominio monopólico en sectores fundamentales de la economía nacional por una nueva “área de propiedad social”, llamada además a asumir un papel dominante en el funcionamiento del conjunto del sistema económico; se procura una profunda redistribución progresiva del ingreso y un rápido ascenso en el nivel de vida material de las grandes masas. Y todo ello, con sus éxitos y deficiencias, en los marcos de una democracia que buscaba profundizarse y bajo una institucionalidad heredada que se proponía transformar mediante los mecanismos previstos por ella misma. Luego, a partir del golpe militar de septiembre de 1973, el país comienza a vivir la más cruenta de las reacciones, que pone fin a muchas décadas de normalidad institucional; que ignora la constitución, clausura el parlamento, somete al poder judicial y lo sustituye parcialmente por el imperio de los tribunales militares; que arrasa con los derechos humanos, individuales y ciudadanos; suspende o prohíbe los partidos políticos, destruye las organizaciones sindicales, interviene las universidades; entrega a manos de los propietarios originales fondos y fábricas; que negocia indemnizaciones indebidas con empresas extranjeras y vulnera acuerdos internacionales para ofrecer condiciones de privilegio a otras; que provoca la más seria redistribución regresiva del ingreso y reduce drásticamente el ingreso real de los trabajadores y amplias capas sociales; y que busca afirmar un esquema neofascista de dominación.

La sola presencia de estas dos experiencias tan contradictorias y de tanto alcance, con su sello esperanzador la primera, y de desolación la que ahora se vive, reclama alguna explicación acerca de las razones por las que habrían de darse en Chile, y en esta etapa histórica. Abre también interrogantes sobre la posibilidad de su reproducción en otros países, en tanto hubieran obedecido allí a factores que están igualmente presentes en ellos.

Es cierto que Chile exhibe, en su evolución histórica, y en la estructura política, social y económica que llegó a conformar, una variedad de rasgos que le son peculiares. Pero tales peculiaridades no conforman un conjunto distinto en lo esencial al de muchos otros países latinoamericanos; probablemente lo que hacen esas particularidades es extremar y amplificar, en una etapa más temprana además, características básicas comunes, desnudando la esencia del problema, todavía no igualmente evidente en otros sitios. Si así fuera, habría que mirar también a esa experiencia como una suerte de anticipación en Chile de etapas decisivas que otros países confrontarán en términos similares.

Por mucho que legítimamente se destaque la diversidad de situaciones nacionales al interior de América Latina, hay en las últimas décadas un recorrido que en lo fundamental resulta ser común, en tanto ha tenido como objetivo central la búsqueda de formas capaces de afianzar un desarrollo capitalista que permita la expansión de las fuerzas productivas y la resolución de problemas y desequilibrios apremiantes. Fue el papel que se atribuyó a la industrialización orientada hacia la sustitución de importaciones, con la que se procuraba entre otras cosas resolver, por una parte, la tendencia persistente al desequilibrio externo —originada por los comportamientos diferentes de la demanda de manufacturas y de productos primarios, así como por el deterioro a largo plazo de la relación de precios del intercambio exterior—, propender, por otra, a una diversificación mayor de la estructura económica de forma que sirviera de base a nuevos desarrollos, y abrir oportunidades suficientes de empleo a la población activa y a la mano de obra rural que la penetración del progreso técnico en la agricultura desplazaba hacia los centros urbanos. En los hechos, los avances del desarrollo industrial, en las condiciones en que tuvieron lugar, distaron mucho de alcanzar esos atributos. Se apoyaron en, y contribuyeron a acentuar, un alto grado de concentración del ingreso que determinaba una infraestructura industrial muy diversificada, con escalas relativamente pequeñas y consecuentemente de baja eficiencia. Los intereses del imperialismo, en lugar de oponerse a esos esfuerzos, buscaron exitosamente subordinados a su dominación, haciéndoles dependientes, de su aporte tecnológico, del suministro de materias

primas y productos intermedios, y por último haciéndose cargo directamente de ellos a través de la instalación local de inversiones y empresas extranjeras; de ahí, entre otras consecuencias, que lejos de atenuarse el desequilibrio externo se viera acrecentado, por el alto contenido importado de las manufacturas cuyo consumo por las capas de alto ingreso se veía estimulado por la producción local, por las remesas que compensaban la variedad de "servicios técnicos" proporcionados desde el exterior, por el servicio de los préstamos externos con que frecuentemente se financiaban las instalaciones industriales, y por las utilidades que transferían las inversiones extranjeras directas. Tampoco fue significativo el aporte a la resolución de los problemas de empleo, ya que la industrialización, con las características que asumió, absorbía una cuota relativamente baja del crecimiento persistente de la población en edad activa; de ahí el fenómeno creciente no sólo de desocupación abierta sino principalmente de desempleo disfrazado y subempleo, así como la deformación de la estructura ocupacional, con una proporción excesiva constituida por la ocupación en servicios y otras actividades de baja productividad. En la medida en que se avanzaba en la sustitución de importaciones, los requerimientos de desarrollo industrial pasaban a depender más de los mercados internos en general pequeños y limitados además por la concentración del ingreso. En definitiva, éstos y otros factores terminan por caracterizar situaciones de lento crecimiento económico, baja tasa de acumulación, desequilibrios crecientes de balanza de pagos, incapacidad para resolver los problemas de empleo, etc. De esos resultados deriva también el aumento progresivo de capas sociales que quedan marginadas del proceso, con una situación de marginalidad que no se limita a la expresión más directa constituida por su condiciones de vivienda sino de un modo mucho más general en los planos social, cultural, político y desde luego económico.

En el cuadro de esas limitaciones se definen sucesivamente diversos esfuerzos encaminados a superarlas, los que asumen expresiones concretas tanto en el plano de las políticas económicas como en el plano político general. En tanto las insuficiencias del desarrollo capitalista se atribuyeron a la persistencia de estructuras sociales de carácter semifeudal y semicolonial, se trataba de doblegar los intereses de oligarquías agrarias y comerciales y de cortar lazos caracterizados como colonialistas, lo que configuraba proposiciones de contenido nacionalista y un grado mayor de democratización, como bases de sustentación para una burguesía industrial "moderna". Luego, las consideraciones relativas a los requerimientos de acumulación de capital y de absorción tecnológica atenúan su contenido antimperialista, buscando por el contrario fórmulas de con-

ciliación a través de esquemas de “cooperación financiera y técnica internacional”, y de una mayor “diversificación” de las inversiones extranjeras, de modo que se desplazaran desde las actividades primarias —agrícolas y extractivas— a la manufactura y actividades complementarias. Frente a la estrechez de los mercados internos, como factor limitante de la industrialización, se impulsan iniciativas de “integración económica” a niveles regionales y subregionales, y se golpea a las puertas de conferencias internacionales demandando que los países industrializados faciliten el acceso a sus mercados de productos manufacturados procedentes de países subdesarrollados. A la marginalización de sectores crecientes de población se procura responder con formas directas de ayuda y una rápida expansión de servicios públicos, a la vez que se busca atenuar los efectos de la alta concentración del ingreso por la vía tributaria y otros instrumentos indirectos. Los problemas cada vez más agobiantes de desempleo llevan la preocupación a los índices demográficos, motivando proposiciones encaminadas a limitar el crecimiento de la población y la demanda futura de ocupaciones, así como atenuar los efectos de la concentración del ingreso y la marginación de las capas más pobres.

Son bien conocidos los resultados que en definitiva se registran, la variedad de fórmulas políticas empleadas, incluidas las experiencias populistas y reformistas más “avanzadas”, y las modalidades de integración de esos esfuerzos con los intereses del imperialismo norteamericano, entre las cuales la “alianza para el progreso” representó, hasta su fracaso, la más elaborada. En ese recorrido histórico, se identifica una tendencia generalizada a la acumulación de limitaciones, con velocidades distintas según las particularidades de cada situación nacional, que se expresa en desequilibrios externos que llegan a ser agobiantes (acrecentados en último término por las consecuencias del endeudamiento a que se va recurriendo como expediente “transitorio”); desequilibrios fiscales y presiones inflacionarias, expresión en gran medida de la pugna de las diferentes capas sociales por defender o ampliar su participación en la distribución del ingreso, así como por los requerimientos de expansión del gasto público como corrector de diferenciaciones sociales excesivas, o procurando a través de él nuevos impulsos dinámicos que no surgen espontáneamente del funcionamiento del sistema económico; insuficiencia del crecimiento económico, y por lo tanto, magnitudes crecientes de marginalización, subempleo y desocupación; imposibilidad de atender a las demandas de mejoramiento en el nivel de vida material de las masas, etc. Son los límites que en un momento relativamente temprano encuentra el capitalismo dependiente como esquema de desarrollo, su agotamiento ine-

vitale, que a su vez determinan cambios obligados en los requerimientos políticos para sostenerlo y en el carácter de las luchas para superarlos.

Es en este sentido que Chile aparece como un caso extremo, pero al mismo tiempo representativo, en América Latina, en tanto se da allí un conjunto de condiciones que llevan más rápidamente a la cristalización de ese proceso, conformando objetiva y subjetivamente los rasgos evidentes de agotamiento del esquema.

Cuenta en ello la acumulación de una variedad de factores de naturaleza diversa. El propio tamaño absoluto del país, de su población, impone más temprano que en otros, como Argentina y sobre todo Brasil, limitaciones a un desarrollo industrial que se apoya en la magnitud de un mercado interno empequeñecido además por la concentración del ingreso. Su dotación de recursos naturales, amplia y diversificada en muchos aspectos, es limitada en su potencial de expansión de algunos alimentos básicos; carece de condiciones para el cultivo de productos tropicales y semitropicales, y es muy insuficiente en las reservas explotadas de petróleo, todo lo cual determina una extraordinaria dependencia de las importaciones y por lo tanto de las alternativas del sector externo para abastecimientos críticos. Algunas particularidades de la evolución histórica de su economía, reflejadas en la presencia dominante de "enclaves mineros" asociados a intereses extranjeros, cuya irradiación hacia el resto del sistema sólo podía lograrse a través de la tributación, determinaron un desarrollo relativamente amplio del aparato estatal, que a su vez contribuyó a la expansión numérica de "capas medias" asalariadas, con fuertes aspiraciones de consumo. El conjunto de la superestructura institucional tuvo rápido desarrollo y facilitó la expresión abierta de los intereses de clase y sus contradicciones. La temprana concentración minero-proletaria facilitó el desarrollo organizativo y de la conciencia política de los trabajadores, traducida en partidos populares y organizaciones sindicales como instrumentos para la defensa permanente de sus intereses, opuestos al sostenimiento de condiciones de superexplotación como base para una acumulación capitalista mayor, debilitada ésta además por la fuerte transferencia de recursos al exterior por las empresas extranjeras que dominaban las actividades más importantes.

Dentro de ese cuadro, los avances políticos impuestos o respaldados por los trabajadores y capas populares se tradujeron en una variedad de experiencias. El Frente Popular, triunfante en 1938, con definiciones nacionalistas y antioligárquicas, da fuerte impulso a la industrialización y a un aparato estatal de respaldo a la vez que contribuye a un grado mayor de democratización. Pero los estímulos iniciales, acrecentados por las dificultades de abastecimiento externo durante la segunda guerra mun-

dial, se van debilitando, y la burguesía nacional fortalecida busca entretanto afianzar su posición conteniendo por la fuerza las demandas populares y subordinándose a intereses extranjeros, como ocurre durante el gobierno de González Videla. Como reacción, las proposiciones populistas encuentran su expresión en la elección del presidente Ibañez, periodo en que los propósitos de mejoramiento social, en ausencia de los necesarios cambios estructurales, agudizan los desequilibrios financieros y las presiones inflacionarias, que en definitiva se procura contener a costa del ingreso real de los asalariados. Con Alessandri, la gran burguesía nacional reasume directamente la conducción de la política económica, apoyada en la "ayuda" exterior y procurando condiciones propicias para una expansión mayor de la acumulación privada, sin que lograra sin embargo sobrepasar significativamente las limitaciones estructurales acumuladas por el sistema. Finalmente, el gobierno demócrata cristiano viene a representar el más serio esfuerzo reformista, rodeado además del máximo de condiciones propicias desde el punto de vista del respaldo político interno, de la ayuda exterior (siguiendo con fidelidad la "filosofía" de la "alianza para el progreso"), de la coyuntura internacional en relación a los precios del cobre, etc. Por lo mismo, su fracaso representa la expresión más elocuente del grado de agotamiento del sistema y de la inviabilidad de un esquema de capitalismo dependiente como modo de desarrollo de la economía chilena. Cada una de esas experiencias enriquece entretanto el acervo político del pueblo chileno y su capacidad de lucha, orientada cada vez más bajo la convicción de que no hay otro camino frente al agotamiento histórico del sistema que el abrir paso a una transformación socialista.

En ese recorrido vienen consolidándose los rasgos que caracterizan la situación al término del gobierno de Frei y que sirven de fundamento al programa de la Unidad Popular. El desequilibrio externo ha alcanzado dimensiones difíciles de manejar, con una acumulación de endeudamiento exterior cuyo servicio llega a comprometer para los años próximos más de un tercio de los ingresos corrientes de exportación previsible. La extranjerización de la economía chilena alcanza no sólo a los recursos naturales básicos y puntos neurálgicos del sector de la industria manufacturera, sino que se extiende a la distribución y los mecanismos financieros. El dominio monopólico es creciente, cerrando perspectivas a la mediana y pequeña burguesía empresarial. Las presiones inflacionarias se acentúan, traduciéndose en un aumento del índice de precios al consumidor de 36% en 1970. La tasa de cesantía supera el 8% de la población activa. El ritmo de crecimiento global de la economía es de los más bajos en América Latina e igual ocurre con la tasa de inversión. En las condi-

ciones de vida material de las masas hay deficiencias e insuficiencias graves, particularmente en la alimentación, que se traducen entre otras cosas en uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo, y las clases populares tienen que recurrir a todos los instrumentos de lucha que han venido desarrollando para defender su exigua participación en la distribución del ingreso.

LA SIGNIFICACIÓN DEL GOBIERNO POPULAR

En esos antecedentes y experiencias se afirma la legitimidad histórica del programa de la Unidad Popular. Ellos permiten apreciar también cómo el triunfo electoral del presidente Allende en septiembre de 1970 no representa un hecho casual, sino un punto de culminación en una larga lucha y una progresiva maduración de la conciencia del pueblo chileno, que obligó además a una importante aproximación programática del candidato demócrata cristiano en la misma elección; en definitiva, más allá de la primera mayoría relativa del representante de los partidos de izquierda, hubo un pronunciamiento ampliamente mayoritario en favor de proposiciones de cambios y transformaciones profundas, que traducían la asimilación de las enseñanzas de las últimas décadas.

Así como no era un hecho casual, ni fruto de errores tácticos de los partidos de derecha, sino que se insertaba en una línea de lucha y continuidad histórica, el surgimiento del gobierno popular no podía dejar de recoger rasgos que estaban profundamente enraizados en las tradiciones nacionales. De ahí el contenido de su programa y las formas que definía para procurar su realización.

En su esencia, venía a representar el esfuerzo más decidido y coherente para abrir una alternativa viable al agotamiento del esquema del capitalismo dependiente y a su incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la economía chilena y sus consecuencias sociales. No se trataba esta vez de proponer determinadas reformas al interior del sistema, sino de sustituirlo. De ahí sus objetivos de liberación económica nacional, mediante la nacionalización del cobre y otros recursos básicos que estaban en manos de empresas extranjeras; de erradicación del latifundio, ampliando y acelerando la reforma agraria iniciada, en un contexto distinto, por el gobierno anterior; de reorganización de la economía mediante la constitución de una área social llamada a sustituir el dominio de los grandes monopolios privados que imperaban en las principales actividades productivas, comerciales y financieras por la propiedad y el control social de las empresas correspondientes; de redistribución progresiva del

ingreso que, combinada con esfuerzos inmediatos de reactivación económica, permitiera mejoramientos rápidos y significativos en las condiciones de vida material de los trabajadores; de sustitución de los términos estrictamente capitalistas de funcionamiento de la economía por una condición planificada de ella, apoyándose en el carácter dominante que debía alcanzar el área social y en formas y mecanismos de participación directa de los trabajadores en la dirección y administración de las empresas que la integraban. Al mismo tiempo, comprometía la realización de tales objetivos en los marcos de la institucionalidad tradicional, no en el sentido de que se mantuviera inalterada pero sí en cuanto a que sus necesarias modificaciones fueran impulsadas a través de los mecanismos que esa misma institucionalidad preveía. Buscaba precisamente en su inserción en esa continuidad histórica, y en la fuerza del movimiento social que la respaldaba, la capacidad para enfrentar las enormes dificultades que sin duda había de encontrar: la coalición de intereses que desafiaba, en los que se reunían y entrelazaban los del imperialismo, el latifundio y la gran burguesía nacional; la fuerza y los instrumentos de que éstos disponían para defenderse, incluidos los lazos tan desarrollados de dependencia, su presencia todavía mayoritaria en el parlamento, su influencia en las fuerzas armadas, el poder judicial y la burocracia administrativa; sus mismos propósitos de impulsar transformaciones revolucionarias de gran alcance y simultáneamente procurar elevar el nivel de vida de las masas y atenuar desequilibrios de larga gestación y persistencia anterior.

Todo el curso de la realización de un programa de esa naturaleza estaba llamado a desenvolverse en los marcos de una lucha política cada vez más aguda. Por eso, sus realizaciones y sus insuficiencias, sus éxitos y sus errores, efectivos o supuestos, no pueden apreciarse debidamente si se ignoran o subestiman los conflictos políticos que los rodeaban. Una forma de desenlace definitivo era inevitable; nadie cometía la ingenuidad de ignorarlo: el problema era en qué términos y a partir de qué momento ocurriría. Los problemas básicos del poder no estaban resueltos. Ni la reacción tenía la fuerza suficiente para destruir o paralizar al gobierno popular, ni las organizaciones populares para afirmar la realización definitiva y plena de su programa. Unas y otras necesitaban tiempo, pero con sentido diferente. Para las últimas, se trataba del tiempo necesario para avanzar en el programa, para consolidar sus progresos, para adelantar en las tareas constructivas que habrían de seguir a las primeras tareas liberadoras, para que se gestaran y desarrollaran las nuevas formas y mecanismos de poder popular, sustitutivas en gran medida del viejo aparato estatal de la burguesía, para ganar el respaldo político de la mayoría de la población cuyos intereses objetivos se beneficiaban

con la realización del programa. Cualquiera que sea el juicio político que ello merezca, lo cierto es que hay que señalar que, en su lucha, el gobierno y las fuerzas populares se mantienen fieles al compromiso contraído: respetaron los derechos individuales y sociales; aceptaron el dominio reaccionario sobre los medios de difusión y transmisión ideológica y hasta toleraron su desbordes; la nacionalización del cobre fue acometida mediante una reforma constitucional aprobada por la unanimidad del Congreso, con la presencia de los representantes de la extrema derecha; la reforma agraria fue adelantada mediante las facultades otorgadas por ley propuesta y promulgada durante la administración demócrata cristiana; los avances en la constitución del Área Social fueron alcanzados mediante adquisiciones de activos y acciones y negociaciones directas con los propietarios, así como por la aplicación de disposiciones legales vigentes desde largo tiempo que autorizaban la expropiación o intervención de empresas que incurrieran en actos especulativos, disminuciones arbitrarias de producciones esenciales, ocultamiento o destrucción de productos, etc. Muy distinta fue la actitud de las fuerzas reaccionarias. Para ellas el tiempo era necesario para obstruir y socavar, preparar diversas formas de sabotaje, ejercer todo el peso de la dependencia heredada para estrechar el cerco exterior, bloquear suministros esenciales, paralizar la maquinaria administrativa, minar al gobierno y procurar el mayor debilitamiento posible de sus bases de sustentación económica. Y todo ello, en el entendido de que se apelaría para derribarlo el dominio sobre partes importantes de la institucionalidad tradicional en tanto fuera posible, o de resultar necesario se arrasaría con esa institucionalidad. Buena parte del problema se decidía en el terreno económico, por lo que no es de extrañar que tanto la política económica general como cada acción o decisión económica particular, pública o privada, quedara colocada en el centro de la lucha política y subordinada de algún modo a ella.

Conocido el desenlace, corresponde decir que la derrota transitoria representada por el golpe militar del 11 de septiembre no puede interpretarse como prueba de que el proyecto político y el programa de la Unidad Popular no fuesen viables. En tal sentido, ayudan poco las interpretaciones genéricas y las simplificaciones fáciles; el problema es mucho más complejo y las enseñanzas que entrega sólo pueden desentrañarse reconociendo y comprendiendo esa complejidad.

En el plano económico, llamado a tener un papel tan decisivo, lo cierto es que en una primera etapa —cuando las fuerzas reaccionarias se encontraban más desarmadas y con menor capacidad de obstrucción— los resultados mostraron no sólo la viabilidad del esquema sino que, además, llegaron a ser notoriamente exitosos. Frente al escaso ritmo de cre-

cimiento que registraban los años anteriores, en 1971 el producto nacional aumentó en más de 8 por ciento, expansión que se aproximó al 13 por ciento en el sector de la industria manufacturera. La cesantía, que al término del gobierno de Frei alcanzaba niveles extraordinariamente altos, se redujo a las tasas más bajas registradas históricamente. Tuvo lugar una apreciable redistribución progresiva del ingreso, un aumento del ingreso real de los trabajadores y un ascenso notorio en el nivel de vida y los consumos esenciales de las masas; y al mismo tiempo, se redujeron desequilibrios y atenuaron presiones inflacionarias, hasta el punto de que el índice de precios al consumidor disminuyó su incremento desde 36 por ciento en 1970, a 22 por ciento en 1971. Tales resultados de la política económica de corto plazo se situaron en el marco de avances decisivos en la realización de las reformas estructurales contempladas en el programa: se nacionalizaron el cobre y el salitre, un número apreciable de grandes empresas fue transferida a la naciente Área de Propiedad Social, se conformaron empresas mixtas con mayoría de capital estatal en actividades hasta entonces dominadas por capitales extranjeros, se estatizó el sistema bancario, se cumplió en una alta proporción el objeto de la reforma agraria de erradicación del latifundio, se avanzó en la estatización del comercio exterior y en su reorientación bajo condiciones de plena soberanía y en función exclusiva de los intereses nacionales, se acrecentó la participación estatal en la distribución de productos. Al mismo tiempo, se impulsaron iniciativas —varias de ellas bloqueadas en su trámite parlamentario— para readecuar la maquinaria administrativa a los nuevos requerimientos. Y más importante que ello, la movilización de los propios trabajadores y el pueblo se orientó a hacerse cargo de la resolución directa de algunos problemas y a participar con capacidad decisoria en los mecanismos de conducción y dirección, bajo una diversidad de formas de efectiva participación popular: las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) en las poblaciones, para mejorar los canales de comercialización y combatir la especulación y el acaparamiento; el fortalecimiento y extensión de las Juntas de Vecinos y Centros de Madres; los campesinos a través de los asentamientos, Centros de Reforma Agraria y otras formas de organización a nivel de las unidades reformadas, y de los Consejos Comunales y Provinciales Campesinos a un nivel superior; en las empresas del Área Social, los Consejos de Administración, con participación paritaria de representantes del gobierno y trabajadores elegidos directa y democráticamente por sus bases, como organismos de dirección superior, y los Comités de Producción por secciones, como medio de canalización de las iniciativas productivas de los trabajadores; los Comandos Comunales y Cordones Industriales, los en-

cuentos sectoriales, los Consejos de Salud y Consejos de Educación, etc. En todo ello se expresaba un proceso de auténtica y avanzada democratización de la vida nacional, y se gestaban y desarrollaban formas de poder popular que preparaban la sustitución del Estado conformado por la burguesía para la protección de sus propios intereses por un estado popular en consonancia con los avances y realizaciones revolucionarias.

Es importante insistir en los resultados cuantitativos de esa etapa —en la expansión de la producción, los mejoramientos en el nivel de vida, la disminución de la cesantía, la reducción del ritmo inflacionario— no sólo como expresión de la viabilidad del esquema, y la capacidad para conciliar los objetivos de corto plazo con las transformaciones de fondo, sino también porque esos mismos hechos demuestran la falacia de imputaciones interesadas posteriores, al atribuir los problemas económicos más agudos a incapacidades administrativas, a la presencia de los trabajadores en diversos niveles de decisión, o como resultados inherentes al esquema que traducía los lineamientos políticos centrales del proceso.

Entre tanto, los avances y realizaciones, así como sus insuficiencias, conducían a la etapa más difícil: cuando avanzan las tareas liberadoras y no maduran suficientemente las tareas constructivas; cuando se afecta un esquema tradicional de funcionamiento y aún no se completan las bases necesarias para su sustitución. Y en el plano político general, cuando se han afectado seriamente intereses muy poderosos pero no se ha doblegado todo su poder ni consolidado la capacidad suficiente para enfrentarlos en su defensa desesperada.

Es entonces cuando toma cuerpo definitivo la gran conspiración. Lo cierto es que ésta no dejó de manifestarse en ningún momento, a través de una diversidad de acciones emprendidas por los intereses extranjeros y la burguesía nacional. El solo anticipo de la probable victoria electoral de Salvador Allende, antes de septiembre de 1970, había motivado que las empresas del cobre descuidaran el mantenimiento de las instalaciones, emprendieran una explotación selectiva de minerales con perjuicio de la producción a mediano plazo, acumularan los materiales estériles obstaculizando los desarrollos futuros; y que muchos empresarios nacionales retiraran capitales del país a costa de disminuir existencias de materias primas y repuestos y de debilitar el capital de trabajo. Conductas de esa naturaleza se agudizaron entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1971, fecha de instalación del Gobierno Popular, cuando para tratar de impedir la se llegó hasta el asesinato del comandante en jefe del ejército, procurando crear un caos económico, impulsado abiertamente por el ministro Zaldívar y con la complicidad del entonces presidente Frei. La fuerza del movimiento popular debilitó esas acciones, que luego

fueron recobrando intensidad paulatinamente. Los intereses imperialistas supieron aprovechar la vulnerabilidad creada por los lazos de dependencia para afectar seriamente la situación de balanza de pagos, mediante el cierre de líneas externas de crédito de corto plazo, suspensión de nuevos créditos y exigencia simultánea de que se cumpliera con los servicios de la deuda contraída anteriormente y, más adelante, mediante la negativa de venta de suministros esenciales, así como el cierre abrupto de algunas empresas y la disminución deliberada de la actividad de otras. La burguesía, por su parte, utilizaba su dominio de sectores importantes del aparato productivo y de distribución para iniciar una campaña orientada a fomentar el acaparamiento, la especulación y el mercado negro; su mayoría en el parlamento para una labor de obstrucción legislativa; su influencia en el poder judicial, la Contraloría y los propios funcionarios públicos.

En octubre de 1972 la ofensiva reaccionaria asume ya los rasgos de un desafío abierto, al impulsar un paro patronal generalizado, que resulta desbaratado más que nada por la importancia que entre tanto había alcanzado el área social y por la capacidad de los trabajadores para hacerse cargo directamente del funcionamiento de las fábricas, los medios de transportes y servicios esenciales. Y en marzo de 1973, cuando en medio de las enormes dificultades así creadas la Unidad Popular recibe más del 44 por ciento de los votos en la elección parlamentaria, y el presidente Allende un respaldo popular sin precedentes, la conspiración se plantea directamente el propósito de echar por la borda su propia institucionalidad y procurar el derribamiento del Gobierno Popular por la fuerza, a cuyos efectos extrema sus acciones de hostigamiento y sabotaje económico simultáneamente con los preparativos militares.

A todo ello debieron recurrir los intereses afectados para detener el avance en la realización del programa del gobierno popular. Aun así, la validez del programa, la enorme potencialidad que encerraba, queda en evidencia con el hecho de que toda esa labor sistemática de obstrucción no fue suficiente para impedir que todavía en 1973, cuando se agregan en los últimos meses las situaciones caóticas derivadas del propio golpe, se conservara buena parte de los avances logrados inicialmente. Es un hecho, más alia de la imagen de desastre que ha procurado sembrar la dictadura, que los niveles absolutos del producto interno, del consumo, de las importaciones, resultaron ser en el último año notoriamente superiores a las que habían registrado en 1970 (por ejemplo, de acuerdo a cifras oficiales, el producto interno bruto, medido en millones de escudos de 1965, fue de 21.691 en 1970, y de 22.530 en 1973).

La derrota transitoria puede pues considerarse correctamente como una

expresión más de la magnitud de las fuerzas a que necesariamente se enfrenta en América Latina un proyecto serio y profundo de liberación, y de los extremos a que están dispuestas a llegar por la preservación de sus intereses. Hay mucho que profundizar y aprender de las causas de diverso orden que pueden explicarla. Pero el hecho mismo no justificaría una conclusión general de desesperanza, ni cuestiona en el caso particular de Chile, la legitimidad histórica de lo que fue el programa de la Unidad Popular, en cuyas realizaciones, no obstante la brevedad del período y las dificultades que enfrentó, quedaron patentes las enormes potencialidades que desata un esfuerzo de liberación y transformación como el que definía. Muy por el contrario, es el proyecto actual de la dictadura el que aparece históricamente condenado al fracaso, en tanto reproducirá inevitablemente, y muy amplificadas, rasgos estructurales que desde largo tiempo venían ahogando toda posibilidad de desarrollo nacional.

EL CARÁCTER Y SIGNIFICACIÓN DE LA DICTADURA

En el propio carácter de la dictadura que surge del golpe militar se encuentra una demostración más de la profundidad que llegaron a tener las realizaciones programáticas del gobierno popular. Si las imputaciones de su propaganda tuvieran asidero objetivo, no habría requerido para sostenerse en el poder del mantenimiento por todo un año de condiciones de "estado de guerra interior", de toque de queda, de imperio de tribunales militares, de persecución a toda forma de organización social, de una represión permanente que casi llega a transformarse en un propósito de exterminio.

De igual manera, si las justificaciones aparentes del golpe hubieran sido las efectivas, la Junta Militar habría tenido una variedad de opciones a partir del 11 de septiembre de 1973. Le bastaba con que fuera levantado el cerco exterior, que tan gravemente ahogó la economía chilena en las últimas etapas del gobierno popular, para que pudiera recuperar y expandir niveles de producción y actividad. Estaban en marcha planes de inversión cuya próxima maduración permitiría sobrepasar limitaciones críticas en la producción siderúrgica (desde 500 mil a un millón de toneladas de acero en 1975), el cemento y otros materiales de construcción, un conjunto importante de proyectos industriales, etc. Con la fuerza política necesaria, y sin la obstrucción del Congreso, podría haber impuesto a la burguesía especulativa los tributos necesarios para restablecer progresivamente los equilibrios financieros. Encontraba un aparato estatal readecuado a nuevos requerimientos, dotado de poderosos

instrumentos. El Área Social, desnaturalizado el carácter con que venía conformándose bajo el gobierno popular, podía transformarse en amplia base de sustentación de un fuerte capitalismo de estado. Detenido el proceso de transformaciones revolucionarias, podía definir una política reformista, con ingredientes populistas, que hubiera podido todavía bajo conducción dictatorial recorrer algún trecho hasta llegar al punto de agotamiento que había alcanzado bajo los esquemas de la burguesía.

Nada de eso ocurrió, y hoy es tarde para que pudiera plantearse una reconsideración de esa naturaleza. Aparentemente, las fuerzas armadas no tenían formulado un "proyecto propio", que reflejara de algún modo lo que hubiera podido considerar como expresión de su "ideología institucional". En ausencia de ésta, asumen directamente el papel de instrumento de los intereses del imperialismo norteamericano y la gran burguesía monopólica, marcando inequívocamente desde el inicio el carácter de clase del gobierno de la dictadura. En ello parece originarse también una suerte de divergencia entre su expresión en el plano político y en el plano económico. Al carácter brutalmente represivo exhibido desde su inicio, va agregando progresivamente elementos que le van imprimiendo con más propiedad un carácter abiertamente neofascista. Arrasa con las instituciones de la democracia burguesa, suprime incluso los partidos políticos de la extrema derecha, instala oficiales en servicio activo o en retiro en los niveles de dirección de prácticamente todas las actividades e instituciones, incluidas las universidades. En cambio, define una orientación económica inspirada por una suerte de "liberalismo manchesteriano", entregando toda la responsabilidad del funcionamiento del sistema económico a la "iniciativa privada" y apelando a la libre competencia como el gran mecanismo regulador; y allí, no son ya los militares sino conocidos agentes civiles de los grandes intereses económicos los que asumen los puestos de comando desde el interior del gobierno, lo que se vio confirmado y fortalecido en el último cambio de gabinete ministerial. De este modo, las fuerzas armadas se convierten en instrumento del último intento de preservación del capitalismo en Chile.

Es precisamente esto lo que establece un lazo de coherencia entre esas expresiones de la dictadura en los planos político y económico: una política económica profundamente reaccionaria, que requiere para su sostenimiento de un fuerte aparato represivo capaz de imponer sus consecuencias. En efecto, por las propias características estructurales de la economía chilena, el propósito de restablecer y preservar el capitalismo sólo puede apoyarse en una superexplotación de los trabajadores, de la que provengan los recursos en los cuales apoyar la acumulación capitalista. Pero hacerlo así, después del grado de organización alcanzado por

éstas, de su extraordinario desarrollo político forjado a través de muchas décadas de lucha y fortalecido sustancialmente durante el gobierno popular, de lo que entonces avanzaron no sólo en términos de sus condiciones de vida material sino de participación y dignificación, requería apelar a las más brutales formas de represión y destruir sus organizaciones políticas y sindicales.

Por eso a la dictadura no le resultan suficientes determinadas rectificaciones, susceptibles de encauzarse dentro de términos políticos que acogieran siquiera en parte la institucionalidad tradicional del país. Su fuente de apoyo y lo que tiene que representar son intereses extranjeros, y por lo tanto profundiza la dependencia; y son los intereses de la gran burguesía monopólica, los que reclaman una fuerte concentración del ingreso y de pauperización consiguiente de las masas populares.

Todo ello se refleja con nitidez en las orientaciones generales de la política económica expuestas oficialmente, en los instrumentos a que recurre y sobre todo en las consecuencias que se constatan al cumplirse un año desde el golpe militar.

Con el propósito aparente de reestructurar el sistema de precios de modo que refleje "precios reales", se suprimen controles y autorizan alzas que terminan por significar que en menos de un año el nivel de los precios internos, particularmente de los productos y servicios de consumo esencial, se multiplica más de 15 veces. Entre tanto, los salarios y sueldos aumentan menos de la mitad de esa proporción, con lo que se ocasiona una violenta redistribución regresiva del ingreso y un severo deterioro del ingreso real y la capacidad de compra de la población asalariada. Se establece un nuevo sistema cambiario, en el que se unifican los diversos tipos de cambio aplicables a las importaciones, lo que ha significado entre otras cosas, multiplicar por 40 veces el cambio para las importaciones de trigo, azúcar, petróleo, carne y productos lácteos, etc. Mientras tanto, se baja primero y aumenta muy lentamente después el cambio del "mercado de corredores", aplicable a los viajes al exterior y las remesas de capital. La represión y la discriminación políticas, agregadas a la concepción del trabajo como un "producto de mercado", a la eliminación de los derechos de los trabajadores y a la impunidad con que actúan los grandes empresarios, llevan a unos niveles increíbles de cesantía, los mayores conocidos en la evolución histórica de la economía chilena (apreciaciones fundadas estiman que la desocupación alcanza tasas del orden de 18 a 20% de la población activa, y según transcripción reciente en un reportaje de *Excelsior*, *El Mercurio* habría reconocido la cifra de un millón de cesantes, que representaría más del 30 por ciento de la población activa); y aun así, se anuncia en los últimos meses un

programa para despedir a cien mil funcionarios de la administración pública. Con el supuesto propósito de reducir el déficit fiscal, se disminuyen sustancialmente servicios públicos fundamentales para la población, se suprimen bonificaciones, en tanto se incrementan los gastos destinados a los aparatos militares y represivos y se extienden nuevas franquicias y exenciones a empresas y personas de alto ingreso. Con todo ello, el empobrecimiento se extiende a variadas capas sociales que constituyen la gran mayoría de la población: unas golpeadas por la subalimentación y el hambre, sectores medios y de profesionales que este invierno no pudieron enfrentar los gastos de combustible para calefacción de sus viviendas, pequeños comerciantes que han visto disminuir drásticamente sus volúmenes de ventas, pequeños productores que confrontan la quiebra de sus empresas por la ausencia de demanda, la desvalorización casi total de su capital de trabajo y el cierre de sus posibilidades de acceso a fuentes de crédito.

Y aun así, la dictadura no logra restablecer los "equilibrios" hacia los que orientaba su política económica de corto plazo. Las presiones inflacionarias siguen presentes y amplificadas, hasta el punto de que en lo que va corrido de este año, descontado por lo tanto el efecto inicial de la reestructuración de los precios en septiembre y octubre de 1973, el promedio *mensual* de aumento de precios es de 15 por ciento. Las devaluaciones del tipo de cambio siguen aplicándose periódicamente, hacia un nivel que parece cada vez más distante. Se reconoce a mediados del año la perspectiva de un déficit fiscal sustancialmente mayor al "programado" en el momento de la formulación presupuestaria. La producción, en particular la destinada al mercado interno, se incrementa en los primeros meses, en buena medida como resultado de la imposición de un régimen militar de trabajo; pero se acumulan *stocks* y la reducción de la capacidad de compra de la población no permite su colocación, de modo que tiende a disminuir, representando nuevas fuentes de cesantía y de perjuicio para medianos y pequeños productores (ya en el mes de marzo de este año, la producción industrial resultó ser inferior a la de la de marzo de 1973, con todos los problemas que enfrentaba en ese momento el gobierno popular).

No se trata sin embargo sólo de la política económica de corto plazo. Paralelamente con ella, se redefine el régimen de propiedad en las actividades económicas: numerosos fundos expropiados, incluso algunos durante el gobierno demócrata cristiano, regresan a manos de sus antiguos propietarios; se transfieren a la propiedad de empresarios privados, nacionales o extranjeros, las empresas que integraban el Área Social y otras que desde administraciones anteriores habían sido desarrolladas como em-

presas estatales; se venden las acciones de propiedad pública, activos y bienes fiscales, en la más gigantesca subasta pública de un país en remate, con postores en la actitud de comprar a vil precio. Y si no puede devolverse el cobre, cuando menos se reabren negociaciones sobre unas indemnizaciones ya zanjadas por medio de una reforma constitucional y se acuerda con las compañías extranjeras el pago de decenas de millones de dólares (sólo con la Anaconda 65 millones de dólares de pago inmediato y 188 millones de dólares pagaderos en 10 años y con una tasa bruta de interés de 10 por ciento anual, según información de *The New York Times*, del 25 de Julio).

Simultáneamente con ello, se desmonta progresivamente la maquinaria administrativa estatal, con la obvia excepción de los servicios represivos y policiales. Se suprimen o debilitan organismos de dirección y control, se transfieren al "Área Privada" instituciones y servicios de fomento, y hasta de servicios públicos tradicionales como los de educación y salud; se comunica que las universidades deben autofinanciarse y se venden instalaciones de los policlínicos de poblaciones.

No son sin embargo medidas aisladas y desconexas, sino expresiones de un esquema global e internamente coherente. En la concentración del ingreso, el deterioro del nivel de vida de las masas y la superexplotación de los trabajadores, se busca la fuente de recursos para la acumulación capitalista. En la política cambiaria, la "eficiencia" a costa de la desocupación, las garantías y franquicias a la inversión extranjera (formalizadas en un estatuto que mereció la reclamación conjunta de Bolivia y Perú por violar compromisos del Pacto Andino), se busca la posibilidad de reorientar la economía chilena hacia las exportaciones, como compensación por la reducción del mercado interno que el mismo esquema determina. En la reducción del gasto y los servicios públicos, la supresión de bonificaciones y actividades de alto interés social, se busca alcanzar los equilibrios financieros sin afectar a las capas de alto ingreso. No importa frente a ello el costo que involucra la profundización de la dependencia y subordinación a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, el deterioro en el nivel de vida material de la población, la creciente monopolización de la actividad económica y sus efectos sobre la pequeña y mediana burguesía empresarial. Lo sorprendente es que, aun así, ese costo esté resultando estéril incluso desde el punto de vista de los objetivos de la dictadura. El imperialismo cumple con entregarle la ayuda financiera, pero no hay una corriente espectacular de nuevas inversiones extranjeras, probablemente percibiendo la inestabilidad política de la Junta. La gran burguesía nacional acrecienta sus ingresos, pero no los vuelca a la acumulación, ni regresan al país los empresarios que salieron durante el gobier-

no popular. La paralización de las inversiones públicas no se ve compensada por una expansión correspondiente de inversiones privadas, y resulta ser burdamente ilusorio esperar, en las condiciones concretas de Chile, una corriente de exportaciones diversificadas que compense el estrechamiento del mercado interno.

Quedan así configuradas las dos experiencias, en sus rasgos más definidos, que Chile aporta a la historia reciente de América Latina y a los movimientos populares. El esfuerzo más sólido y consecuente para superar las limitaciones de toda índole que inevitablemente imprimen los términos en que se da en nuestra región el esquema de capitalismo dependiente, procurando su sustitución por un camino de transformación socialista en una línea de continuidad con la evolución histórica del país y las particularidades nacionales impuestas por ella. Y el más desesperado de los intentos de reconstruir y preservar ese capitalismo dependiente, de impedir la transformación socialista, que obliga a arrasar con esa historia y procurar la implantación de un sistema neofascista de dominación.